



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, febrero 16 de 2023

Radicado: 05001-31-05-008-2019-00562-01  
Demandante: MARÍA BEATRIZ YARCE LÓPEZ  
Demandado: COLPENSIONES  
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA.  
Tema: PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE

La Sala Sexta de decisión, presidida por el magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN, e integrada por las magistradas MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

**ANTECEDENTES**

La accionante instauró proceso ordinario en contra de COLPENSIONES solicitando, se deje sin valor la fecha de estructuración fijada por la entidad en el dictamen de PCL y en su lugar se declare que la fecha de estructuración de invalidez fue anterior al fallecimiento de su hermano ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ de quien dependía económicamente y en consecuencia se ordene a COLPENSIONES a reconocer y pagar pensión de sobreviviente en calidad de hermana inválida.

Para respaldar sus pretensiones indicó que nació el 3 de abril de 1946, es hermana del señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ (qepd), siendo ambos hijos de los

señores MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ y JUSTO PASTOR YARCE. Que durante toda su vida vivió con su madre y hermano de quien ambas dependían económicamente.

Indicó que el señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ falleció el 24 de septiembre de 2010; que la señora MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ se presentó ante COLPENSIONES en calidad de madre a reclamar pensión de sobreviviente, solicitud que fue resuelta de manera desfavorable a través de resolución GNR 100252 del 9 de abril de 2015 por no acreditar dependencia económica. Resolución frente a la cual presentó los recursos de ley y le fue concedida la prestación a través de resolución VPB 75144 del 16 de diciembre de 2015.

Afirmó que se presentó a reclamar ante COLPENSIONES pensión de sobreviviente en calidad de hermana inválida del señor ORLANDO DE JESÚS, razón por la cual fue calificada el 2 de diciembre de 2015 otorgándole una PCL de 51.17% con una fecha de estructuración del 17 de marzo de 2011. COLPENSIONES a través de resolución GNR 167603 del 09 de junio de 2016, indicó que no era procedente reconocer la pensión solicitada, por tanto, la misma ya le fue reconocida a la señora MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ en calidad de madre del causante. Decisión frente a la cual presentó recursos de reposición y apelación resueltos a través de resoluciones GNR 808206 el 18 de octubre de 2016 y VPB 44766 del 15 de diciembre de 2016 mediante las cuales se confirmó en todas sus partes la negativa.

Indicó que el 20 de mayo de 2018 falleció la señora MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ dejándola desprovista de cualquier protección, razón por la cual solicitó nuevamente ante COLPENSIONES pensión de sobreviviente en calidad de hermana del señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ.

**En sentencia de primera instancia** el *A quo* consideró que, de conformidad con la ley 797 de 2003 los artículos que regulan los beneficiarios de la pensión de sobreviviente son excluyentes, por lo tanto, para que una hermana inválida tenga derecho a la pensión de sobreviviente no pueden existir beneficiarios con mejor derecho, tales como cónyuge o compañera permanente, hijos y padres. En ese sentido, consideró que al haberse reconocido la sustitución pensional del señor

ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ a la señora MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ, excluyó la posibilidad de ser reconocida como beneficiaria de la pensión que solicita la demandante en calidad de hermana inválida.

Decisión que no fue recurrida y que se conoce en esta instancia en el grado jurisdiccional de consulta.

### **ALEGATOS**

Concedido el término que establece el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, la parte demandante presentó alegatos indicando que la muerte de la madre del causante habilita el derecho de la actora como beneficiaria de la pensión que reclama, estando demostrado el cumplimiento de los requisitos que en calidad de hermana inválida.

### **CONSIDERACIONES**

Sea lo primero indicar que, en este caso se encuentra por fuera de discusión que:

**1)** La señora MARÍA BEATRIZ YARCE LÓPEZ nació el 7 de abril de 1946 (pág. 17, anexo 01). **2)** ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ nació el 7 de agosto de 1958 (pág. 20, anexo 01), ambos hijos de MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ JIMÉNEZ y JUSTO PASTOR YARCE TABARES. **3)** Que el señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ falleció el 24 de septiembre de 2010 (pág. 23, anexo 01). **4)** Que mediante resolución GNR 275029 de septiembre de 2015 COLPENSIONES reconoció pensión de sobreviviente a la señora MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ DE YARCE en cuantía del SMMLV y a partir del 22 de diciembre de 2011 (pág. 33 a 58). **5)** Que la señora MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ JIMÉNEZ falleció el 20 de mayo de 2018 (pág. 25, anexo 01). **6)** Que la señora MARÍA BEATRIZ YARCE LÓPEZ fue calificada el 22 de diciembre de 2015 por COLPENSIONES, en donde se le halló una PCL del 51,17% por las enfermedades de origen común de EPOC, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, AGUJERO MACULAR OJO IZQUIERDO, ARTROSIS DE HOMBROS CON ARCOS DE MOVILIDAD PASIVOS con fecha de estructuración del 17 de marzo de 2011 (pág. 27 a 32).

Establecido lo anterior, y comoquiera que no existe discusión sobre la causación de la prestación en tanto ya fue reconocida a la madre del causante, en esta instancia se discute si la señora MARÍA BEATRIZ YARCE LÓPEZ es beneficiaria de la pensión de sobreviviente en calidad de hermana inválida del señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ.

Habiendo fallecido el señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ el 24 de septiembre de 2010, la norma aplicable para el presente caso son los artículos 12 y 13 de ley 797 de 2003, los cuales establecen que para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en calidad de hermana inválida, se debe acreditar:

1. Invalidez de al menos el 50%
2. Dependencia económicamente al momento de fallecimiento del causante.

Además, en los términos de los artículos mencionados para que la hermana inválida tenga derecho no deben existir beneficiarios con uno mejor, toda vez que la norma los enlistó de forma prevalente y excluyente.

En esta instancia se analizará inicialmente si la demandante cumple con los requisitos para considerarse beneficiaria de la prestación que reclama, y después analizar si es posible el reconocimiento de la pensión teniendo en cuenta que está en el último orden de beneficiarios.

En lo que tiene que ver con el requisito de la invalidez, la activa pretende se modifique la fecha de estructuración de su invalidez fijada en dictamen emitido por ASALUD LTDA, entidad que prestó el servicio de calificación de invalidez a COLPENSIONES y que otorgó como fecha de estructuración el 17 de marzo de 2011 y en su lugar se fije la dictaminada en el peritazgo aportado con la demanda que fijó la fecha de estructuración el 24 de julio de 2009 (pág. 279).

Esta Sala estima pertinente remitirse a sentencia SL 1044 de 2019 en donde la H. Corte de Justicia Sala laboral, recordó que la gestión que se realiza ante las juntas de calificación de invalidez conforme a los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 100 de 1993, reglamentados por el Decreto 2463 de 2001 no corresponde a un trámite administrativo previo que necesariamente deba agotarse para que se reconozca la

pensión de invalidez, puesto que la parte interesada en la valoración médica también puede acudir directamente ante la jurisdicción ordinaria laboral, reiteró su postura trayendo a colación decisiones anteriores en las que se dijo:

*En esas condiciones, la Sala estima, en acuerdo con el recurrente, que el adecuado entendimiento de los artículos 41, 42 y 43 de la ley (sic) 100 de 1993 es crear una opción conforme a la cual si el asegurador niega el reconocimiento de la pensión de invalidez, el asegurado puede acudir a las juntas de calificación de invalidez o al juez del trabajo, a su elección, pues también se puede acudir a ellas una vez iniciado el trámite judicial, para darle al dictamen pertinente el trámite que le corresponde en su calidad de prueba.”.*

Conforme lo anterior y teniendo claro que era derecho de la demandante decidir interponer recurso o remitirse a la justicia ordinaria para decidir sobre su estado de discapacidad, se procede a valorar la prueba decretada y practicada dentro del proceso.

En lo que tiene que ver con la fijación de la fecha de estructuración, se tiene que el Decreto 1507 DE 2014 indica sobre la misma:

*Fecha de estructuración: Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional, de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado éstos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en el que la persona evaluada alcanza el cincuenta por ciento (50%) de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.*

Descendiendo al presente caso, reposa como prueba documental que da cuenta de las calificaciones y estado de salud de la demandante la siguiente información:

- Dictamen emitido por ASALUD LTDA en donde se le calificó con una PCL del 51.18% con fecha de estructuración del 17 de marzo de 2011, argumentando para fijarla la cita de la misma fecha en donde se le realiza ESPIOMETRÍA POST y con la cual se le diagnostica EPOC.
- Dictamen emitido por el médico especialista en salud ocupacional JUAN GUILLERMO CALVACHE GIRALDO, en donde se indica que la demandante presenta una PCL del 51,17% con fecha de estructuración del 26 de junio de

2009, argumentando que de conformidad con la historia clínica ya la demandante para esa época presentaba disnea (pág. 278).

Ahora, ha de destacar esta Sala que en ambos dictámenes se tuvo en cuenta para evaluar a la actora las patologías de EPOC, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, AGUJERO MACULAR OJO IZQUIERDO, ARTROSIS DE HOMBROS CON ARCOS DE MOVILIDAD PASIVOS, fijando tanto COLPENSIONES como el PERITO PARTICULAR la fecha de estructuración una vez diagnosticado o manifestado el EPOC que fue una de las últimas enfermedades desarrolladas por la demandante y, además se especifica que se trata de una enfermedad progresiva.

De la historia clínica ampliamente aportada por la demandante se destaca que:

- Para el 6 de agosto de 2001 ya estaba diagnosticada con hipertensión arterial (pág. 181).
- Consulta en el año 2008 por presentar tos seca permanente (pág. 99).
- El 26 de junio de 2009 presenta falta de aire, con disnea para caminar, reírse y se le recetan inhaladores (pág. 97 98).
- En septiembre de 2010 indica continuar con disnea de esfuerzo y presentar palpitaciones (pág. 113).
- El 21 de noviembre de 2009 ya tiene diagnosticado hiperlipidemia, se reitera la hipertensión y es diagnóstica con trastorno metabólico de los carbohidratos (pág.155).
- El 11 de diciembre de 2009 con quiste coloide e hipoglucemia (pág. 154).
- Con oxígeno domiciliario por 18 horas al día desde 3 de marzo de 2011 (pág. 112).
- 63 años, dolor de hombro izquierdo hace dos años y derecho ha aumentado hace 3 meses con artrosis quistes de erosión subcondral y formación osteofitaria del tercio distal de clavicular bilateral esclerosis de troquier degenerativo, se remite a valoración 5 de mayo de 2010. (pág. 95).

De conformidad con lo anterior, considera esta Sala al analizar la historia clínica de la demandante que es posible fijar la fecha de estructuración de la demandante el 26 de septiembre de 2009, conforme fue fijada por el médico especialista y evaluador

de PCL de la demandante, por cuanto para esa data ya presentaba los síntomas del EPOC que son relacionados durante toda la historia laboral cuando se analiza el estado de la enfermedad y que tiene que ver con la **disnea de esfuerzo**; sin pasar por alto que para esta fecha la accionante ostentaba la condición de adulto mayor pues contaba con 63 años, lo que implica una especial protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado quienes deben concurrir armónicamente a fin de garantizar su mínimo vital.

Entonces, acreditada como se encuentra la invalidez de la demandante con anterioridad al fallecimiento de su hermano (24 de septiembre de 2010), pasa esta Sala a verificar si se encuentran satisfechos los requisitos de dependencia económica.

Para acreditar el requisito de dependencia económica en audiencia de trámite y juzgamiento se recibieron los siguientes testimonios.

El testigo Samuel de Jesús Chavarriaga Vergara (min. 28:10), indicó que conoció a María Beatriz y a Orlando porque fueron vecinos por 25 años. Dijo que Orlando no era casado ni tenía hijos. Vivió con su madre Socorro y su hermana María Beatriz. Supo que murió de forma violenta mientras realizaba su labor como taxista. Refirió que era Orlando quien llevaba la obligación en su hogar, ya que su hermana María Beatriz no trabajaba debido a su estado de salud, manifiesta que desde que los conoce María Beatriz ha sido muy enferma.

El testigo José Jaime Gallego Arias (min. 34:56), manifestó que conoció a María Beatriz, fueron vecinos por 35 años. Indicó que Orlando era taxista, vivía junto con su madre y hermana, era quien se encargaba económicamente del hogar, dice que la madre y la hermana de Orlando no trabajaban ni tenían ningún tipo de ingreso. Desde que conoce a María Beatriz, siempre ha tenido problemas de salud Epoc.

Finalmente se recibió interrogatorio de parte de la demandante (min.09:10), manifestó que era hermana del señor Orlando de Jesús Yarce, quien tenía por profesión taxista y murió de forma violenta el 24 de septiembre de 2010. Refirió que vivían junto a su madre en Villahermosa, en casa de propiedad de otro hermano. Su

hermano no tuvo hijos ni tenía pareja. Era el encargado de todos los gastos del hogar, tenía a su madre como beneficiaria en salud. Manifestó que nunca ha trabajado, su estado de salud no se lo permite, era la encargada de los cuidados de la madre. Dijo no tener conocimiento de la afiliación a salud en la que aparece como cotizante, ya que no tiene ningún ingreso para hacerse cargo de los pagos. Después de la muerte de la madre y hermano refiere que al no tener como sustentar los gastos vive por temporadas en casa de sus otros hermanos.

Para la sala resulta diáfana la dependencia económica de la demandante para la fecha en que falleció su hermano ORLANDO DE JESUS YARCE y con ello satisfechos los requisitos con los cuales se puede considerar beneficiaria del causante.

Ahora, se evaluará si es posible reconocer la prestación que se reclama ante la existencia de otros beneficiarios a quienes ya se les había reconocido la prestación y que para este caso fue la madre, quien además convivió con la reclamante y el causante durante toda la vida.

Como ya se había indicado previamente, en los términos de los artículos 13 y 14 de la ley 797 de 2003, para que la demandante en calidad de hermana inválida sea beneficiaria de la pensión de sobreviviente del señor ORLANDO se requiere que no existan otros beneficiarios con mejor derecho, ya que la lista de beneficiarios que enumera la ley son excluyentes.

En ese sentido, fácil sería negar sin más consideraciones la prestación que se solicita, pues si se realiza una check list, la conclusión sería la arribada por el A Quo; no obstante, tratándose de una persona que además de encontrarse en estado de discapacidad, que es oxígeno dependiente, para la fecha de emisión de la presente



sentencia cuenta con 77 años, y quien perdió las 2 personas con quienes vivía y dependía económicamente, acredita las calidades para considerarla de especial protección.

Razón por la cual considera esta sala pertinente, a fin de resolver el juicio que nos convoca, remitirse a la sentencia T-401 de 2004, y reiterada en T-613 de 2017, en donde la H. Corte Constitucional en casos de similares contornos, decidió otorgar la pensión de sobreviviente al hermano inválido.

La H. Corte indicó que para casos como estos en los cuales aplicar la literalidad de la norma equivale a vulnerar derechos fundamentales y principios constitucionales, es necesario la aplicación de excepción de inconstitucionalidad, para inaplicar una norma que es incompatible con los preceptos constitucionales en tanto vulneran derechos fundamentales.

De conformidad con lo anterior, se hace necesario e insoslayable analizar el presente caso a la luz de los principios y derechos constitucionales, pues como lo indicó el alto Tribunal Constitucional, el aplicar la literalidad de la ley sin acudir a principios y valores de mayor envergadura generaría una grave afectación de los derechos fundamentales de la reclamante.

Concluyendo la Corte, tras analizar diferentes pronunciamientos en los cuales se han resuelto situaciones similares al presente, que en los casos de solicitud de pensión de sobrevivientes por parte de sujetos de especial protección constitucional -por hallarse en situación de debilidad manifiesta-, es deber del juez constatar rigurosamente los efectos que la aplicación literal de la norma que regula dicha prestación tiene en el caso concreto. Especialmente debe analizar si tal aplicación: (i) conduce al sujeto a un estado de desprotección tal que comprometa sus derechos

fundamentales y que, al mismo tiempo, desconozca principios constitucionales, y (ii) obstaculiza o contraría la finalidad de la norma que se aplica.

En lo que tiene que ver con el caso que se analiza, ha quedado demostrado que no reconocer la prestación que reclama la aquí demandante, es dejarla desprovista de todo sustento económico que siempre estuvo a cargo de su hermano y posteriormente de su madre mientras percibió la pensión de sobreviviente causada por el hermano. Destáquese que con los testigos e incluso durante toda la reseña de la historia clínica, se logra probar que la demandante nunca ha laborado y por lo tanto el único ingreso con el que contaba, se reitera, era el proporcionado por el afiliado fallecido.

Adicionalmente, el negar la prestación aquí solicitada contraría la finalidad de la pensión de sobreviviente, la cual no es otra que proteger el núcleo familiar del causante que se ve afectado por el fallecimiento, no solo de un integrante importante del hogar, sino además para el presente caso, del proveedor y por tanto quien satisfacía las necesidades mínimas.

Concluyendo la H. Corte que *“no debe pasarse por alto que en algunas circunstancias pueden concurrir varios beneficiarios dentro del mismo grupo familiar, lo que, en atención a lo comentado respecto al principio de subsidiariedad no constituye una situación conflictiva en la que sea necesario establecer preferencias o exclusiones. Esto, por cuanto [...] la sustitución pensional está destinada a que las necesidades del grupo familiar – todo el – no se vean afectadas a causa de la muerte del sujeto pensionado”...*

Y teniendo que el grupo familiar del causante estaba integrado por madre y hermana inválida, se hace necesario proteger a través de la excepción de inconstitucionalidad

para que la demandante, quien se reitera es un sujeto de especial protección, no se siga viendo afectada.

De conformidad con lo anterior, esta Sala revocará la decisión tomada por el A quo y en su lugar reconocerá pensión de sobreviviente a la señora MARÍA BEATRIZ YARCE LÓPEZ en calidad de hermana inválida del señor ORLANDO DE JESÚS YARCE LÓPEZ, pensión que deberá ser reconocida a partir del ciclo de junio de 2018 en tanto los periodos previos fueron reconocidos a MARÍA DEL SOCORRO LÓPEZ JIMÉNEZ.

Pensión que deberá ser pagada en los términos inicialmente reconocida, es decir en cuantía del SMMLV y con 13 mesadas.

Para calcular el retroactivo es necesario indicar que, no se ha configurado el fenómeno extintivo de la prescripción en tanto la pensión fue suspendida en el año 2018 y el presente proceso tiene radicación del 2019.

LIQUIDACIÓN DEL RETROACTIVO

RETROACTIVO PENSIONAL				
Año	IPC	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2018	3,18%	8	\$ 781.242	\$ 6.249.936
2019	3,80%	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	1,61%	13	\$ 877.803	\$ 11.411.439
2021	5,62%	13	\$ 908.526	\$ 11.810.838
2022	13,12%	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
2023		1	\$ 1.160.000	\$ 1.160.000
			TOTAL	\$ 54.397.721

COLPENSIONES deberá reconocer por concepto de retroactivo causado entre el 01/06/2018 y el 31/01/2023 la suma de \$54.397.721 y a seguir reconociendo a partir

del 1 de febrero de 2023 una mesada pensional en cuantía del SMMLV sin perjuicio de los incrementos anuales que se establezcan por el gobierno para el salario mínimo. Se autoriza a COLPENSIOENS a realizar los descuentos por salud del retroactivo hallado.

Sea de paso indicar que, no hay lugar a reconocer intereses moratorios comoquiera que la prestación se reconoce en virtud a la excepción de inconstitucionalidad, dando prevalencia a altos principios y valores constitucionales.

Sin costas en ambas instancias.

En mérito de lo expuesto, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL, **REVOCA** en su totalidad la decisión emitida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín, y en su lugar ordena a COLPENSIONES reconocer y pagar pensión de sobreviviente a la demandante a partir del 20 de mayo de 2018, en cuantía del salario mínimo como ya se venía reconociendo inicialmente a la madre. Calculando el retroactivo desde el hasta el 31 de enero de 2023 en la suma de \$ 54.397.721 y seguir reconociendo a partir del 1 de febrero de 2023 mesada pensional en cuantía de 1 SMLMV Se autoriza a COLPENSIOENS a realizar los descuentos por salud del retroactivo hallado.

Lo resuelto se notifica a las partes por Edicto. Se ordena la devolución del expediente al Juzgado de origen.

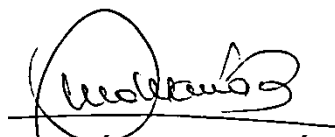
Los Magistrados,



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**



**MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA**



**ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA LABORAL

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-008-2019-00562-01  
Demandante: MARÍA BEATRIZ YARCE LÓPEZ  
Demandado: COLPENSIONES  
Decisión: REVOCA

Magistrado ponente DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 20 febrero de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS

SECRETARIO